

¿Por qué retornó
el PRI al poder?*

/ Why did
the PRI Return
to Power?

*Recibido: 14 de enero de 2013. Aceptado: 26 de febrero de 2013.

TLA-MELAU, revista de Ciencias Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México / ISSN: 1870-6916 / Nueva Época,
Año 7 N° 35, Octubre 2013–Marzo 2014, pp. 6-17.

José Antonio Crespo*

RESUMEN

La pregunta de por qué el PRI regresó a la Presidencia de la República en 2012 puede responderse en dos vías paralelas: una a través de las instituciones —partidos— y la otra mediante sus actores —los candidatos— que contendieron por la presidencia de la república. Desde 1997, con la pérdida de la mayoría en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus dirigentes, se adecuaron a la nueva realidad, adoptando una gobernabilidad de tipo horizontal e iniciando un proceso de liberalización. En el año 2000 finalmente perdió el poder e inició un proceso de recomposición. El Partido Acción Nacional (PAN) capitalizó el apoyo electoral de los ciudadanos no obstante en sus gobiernos olvidaron la promesa de combatir la corrupción y utilizaron las instituciones para frenar la candidatura del abanderado presidencial de la izquierda y polarizaron a la sociedad con decisiones polémicas como sacar a las fuerzas armadas a la calle a combatir el crimen organizado. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) desaprovechó una gran oportunidad de ganar una de las dos elecciones presidenciales, debido a la radicalización del discurso y a las posturas que se alejaron de los electores independientes.

PALABRAS CLAVE

PRI, PAN, PRD, elecciones presidenciales, partidos políticos.

ABSTRACT

The question of why did the PRI returned to the Presidency of the Republic in 2012 can be answered in two parallel ways: one through institutional —parties— and the other by the actors-candidates who contended for the presidency of the Republic. Since 1997 and with the loss of the majority in the Chamber of Deputies, the National Action Party (PAN) and their leaders restructured to their new reality, adjusting a horizontal governability and initiating a self-determination process. The National Action Party (PAN) capitalized on the electoral support of citizens yet in their governments forgot the promise to fight corruption and used institutions to stop the nomination of presidential candidate of the left and polarized the society with controversial decisions like taking the armed forces to the streets to fight organized crime.

The Democratic Revolution Party (PRD) missed a great chance to win one of the two presidential elections, due to the radicalization of the discourse and the bids away from independent voters.

KEYWORDS

PRI, PAN, PRD, presidential elections, political parties.

* Profesor investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), México (joseantonio.crespo@cide.edu)

1. LA GOBERNABILIDAD INTERNA DEL PRI

La elección presidencial de 2012 implicó un nuevo viraje en el proceso de democratización que muchos consideran una regresión, al menos potencial; el triunfo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su retorno a Los Pinos, a doce años de haber sido removido de ahí. Ello exige, desde luego, un intento de explicación. Vayamos desde las variables más estructurales hasta las más coyunturales. En 1998 podía vislumbrarse una derrota del PRI en la elección presidencial del año 2000, pues por un lado, en estricto sentido había dejado de ser un partido hegemónico en 1997, en virtud de las siguientes variables: a) la reforma electoral del año anterior había dado plena autonomía al órgano electoral (el Instituto Federal Electoral) respecto del gobierno, lo que suponía que el partido oficial no podría revertir un resultado desfavorable, como sí podía hacerlo anteriormente; b) en virtud de lo cual perdió por primera vez la mayoría absoluta de la Cámara Baja, así como la capital del país, que por primera vez desde la década de 1920 se puso a decisión de la ciudadanía. Un partido en tales condiciones difícilmente puede llamarse hegemónico, pues además ha perdido la garantía de mantenerse en la presidencia más allá de cuál fuera la voluntad real de la ciudadanía. Justo por eso y porque las tendencias electorales marcaban que el PRI podría obtener una votación menor al 39% (que es lo que obtuvo en la intermedia de 1997), su victoria por primera vez se ponía en riesgo real, como ocurrió.

Ante la derrota histórica del PRI en la presidencia se decía que dos serían los principales retos de ese partido, con vistas a sobrevivir en la oposición y eventualmente retornar al poder:

a) El partido, nacido desde el poder en 1929 había tenido una gobernabilidad de tipo “vertical”, es decir, con un eje central (el presidente) cuyas decisiones esenciales (candidaturas, dirigencias, programa, estatutos) eran acatadas hacia abajo de manera incuestionada. Al perder ese eje, tendría que transformar su gobernabilidad en otra de tipo “horizontal”, es decir, entre varios liderazgos (dirigentes del partido, coordinadores legislativos, gobernadores, líderes corporativos), lo cual le representaría un elevado riesgo de ruptura y, quizá, una virtual disolución de no lograr esta gobernabilidad de manera eficaz y relativamente pronta. Eso se dejó sentir en 2002 al elegir por primera vez a su dirigencia nacional desde las bases. Los competidores fueron Roberto Madrazo y Beatriz Paredes, ganando el primero por un margen

estrecho (1.7%) en medio de acusaciones y evidencias de fraude (en Tabasco, estado natal del que Madrazo fue gobernador, ganó en una proporción de 17 a 1, lo que le dio un 4% de la votación nacional). Paredes decidió mantenerse en el partido, lo que le permitió a éste conjurar el riesgo de ruptura.

Más tarde el partido tuvo que enfrentar otro reto mayor: designar al candidato presidencial sin la participación decisiva del presidente de la República. Desde la dirigencia nacional del partido, Madrazo logró imponerse como candidato, pero no sin generar divisiones y fisuras. Por un lado, entró en colisión con quien había sido su compañera de fórmula para secretaria general del PRI, la entonces poderosa dirigente del sindicato magisterial (SNTE), Elba Esther Gordillo, quien optó por salir del partido (y fundar uno propio, Alianza Nacional, en 2005). A su vez, en la contienda interna por la candidatura, Madrazo filtró a la prensa información sobre corrupción de su contendiente, Arturo Montiel, el ex gobernador del estado de México (1999-2005), con lo cual éste declinó, pero haciendo daño a la imagen de todo el partido y generando división entre los gobernadores que respaldaban a Montiel. Las fracturas y divisiones provocaron que el PRI se fuera al tercer sitio tanto en la presidencia como en la Cámara Baja. Pero aprendió de la experiencia, y en adelante logró pulir sus procesos de toma de decisiones. Beatriz Paredes fue electa dirigente del partido frente a Enrique Jackson en un proceso ya libre de acusaciones y, más tarde fue relevada por consenso, primero por Humberto Moreira, quien hubo de renunciar poco después tras acusaciones de fraude para dejar su lugar, también por consenso, a Pedro Joaquín Coldwell. La designación del candidato presidencial fue también tersa en virtud de que Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México (2005-2011), logró ubicarse en las encuestas muy por encima de todos los posibles aspirantes (en parte debido a una intensa y recurrente exposición mediática, parte de la cual fue presumiblemente ilícita), además de construir poderosas alianzas con el grueso de los gobernadores de su partido (a muchos de los cuales ofreció ayuda durante las campañas en que respectivamente fueron electos). Eso lo ubicó como un aspirante sin oposición real, logrando ser designado como candidato de unidad y que los diversos líderes del partido cerraran filas en torno suyo.

b) El otro reto para el PRI sería arrastrar el estigma histórico de haber sido el eje del autoritarismo, el partido de los fraudes electorales, la corrupción, la represión y los diversos abusos cometidos durante 70 años. Hacia el año 2000, diversas encuestas señalaban que 60% del electorado consideraba que no habría democracia hasta que el PRI perdiera el poder. Era algo semejante (aunque no idéntico) a lo ocurrido con los partidos comunistas de Europa Oriental; para retornar al poder, varios miembros del comunismo fundaron otros partidos más moderados ideológicamente (del marxismo a la social democracia), con un claro compromiso democrático y un cambio

generacional en sus dirigencias. Eso les permitió deshacerse del estigma histórico del comunismo asociado a la represión y el totalitarismo. Los viejos partidos comunistas, donde subsistieron, no han regresado al poder en esos países. El PRI, desde la oposición, no realizó ninguno de esos cambios, salvo algunos ajustes en su plataforma, pero no viendo hacia adelante sino hacia atrás, reviviendo parcialmente el nacionalismo revolucionario que había sido dejado de lado desde 1982 por la élite tecnocrática que llegó al poder con Miguel de la Madrid (1982-1988) y cuya continuación con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) provocó la mayor ruptura del partido en 1987, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas por fuera del PRI en 1988 y el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989.

Ahí donde el PRI mantuvo el poder (en varios estados de la República) lo siguió ejerciendo esencialmente de la misma forma en que lo había hecho antes a nivel nacional. Por lo cual no había motivos para afirmar que el partido había sido renovado en términos democráticos como lo sostenían los priistas hacia 2012: sólo personajes como Vicente Fox, quien presidió la alternancia política en 2000 como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), avalaron fuera del PRI esa tesis. De modo que los ataques al PRI por parte de sus rivales (PAN y PRD), tanto en los comicios intermedios de 2009 como en los presidenciales de 2012, se centraron en su esencia antidemocrática que —en esa perspectiva— no había modificado desde la oposición, y en la regresión autoritaria que su triunfo supondría. Sin embargo, el PRI retornó al poder, lo cual se vislumbraba como fuerte posibilidad desde 2009, cuando logró pasar de la tercera a la primera fuerza legislativa, recuperando 20 de los distritos perdidos tres años atrás. Parte de la explicación seguramente radica en que, a diferencia de los partidos comunistas, el PRI encabezó un autoritarismo relativamente más benigno, más flexible, más tolerante con la disidencia y la oposición, en el cual la represión era instrumento de última instancia, pues la mayoría de conflictos se resolvía a través de la negociación o la cooptación de líderes y movimientos. En otras palabras, mantuvo una dinámica propia de un partido hegemónico, es decir, un partido monopólico de Estado que, sin embargo, convive con partidos opositores legalmente permitidos en condiciones de baja competitividad que le garantiza el triunfo en el poder nacional, el control mayoritario del Congreso y de la gran mayoría de cargos de elección popular. Un partido hegemónico requiere de cierta legitimidad democrática, que exige la presencia de un formato electoral competitivo (aunque en la práctica no lo sea), así como partidos de oposición registrados que compitan legalmente contra el partido oficial. Eso exige, a su vez, cierta tolerancia, cierta apertura, reglas más flexibles, límites a la persecución, el uso de la negociación y la cooptación para solucionar conflictos (dejando la represión como mecanismo de última instancia), una prensa relativamente menos restringida, aceptación legal de la oposición partidista y la disidencia, etcétera.

El PRI fue abriendo poco a poco el régimen político, liberalizándolo en ciertos momentos e incluso aceptando la plena democratización (al menos en el nivel electoral) una vez que la hegemonía fue imposible de prolongarse. Justo por eso, obtuvo el pleno derecho a seguir conteniendo en las nuevas reglas democráticas que había aceptado y consensuado con los partidos de oposición (entre 1990 y 1996), y eso debió haber incidido también en que parte del electorado no lo viera más como un obstáculo inamovible a la democratización. En esa medida, el retorno del PRI podía ser visto por un segmento del electorado (eventualmente suficiente para dar el triunfo a ese partido) como algo menos grave que el regreso de los comunistas en Europa Oriental o de los militares en América del Sur. La «regresión autoritaria» que podría suponer su retorno al poder estaría por verse, pero bien puede adelantarse como poco probable de ser intentada y, en tal caso, con escasas posibilidades de ser exitosa. Eso, debido a que en los años previos (incluso desde antes del 2000) las condiciones sociales e institucionales han cambiado al grado en que la restauración del autoritarismo se ve sumamente difícil y políticamente costosa para quien lo intente. Igualmente, la situación y las condiciones internacionales harían más difícil semejante regresión. Es probable que, dadas tales condiciones, el nuevo gobierno priista considere como poco aconsejable y redituable siquiera intentar, al menos en grado importante, dar marcha atrás al reloj político. Modificar su mala imagen histórica, lo cual puede ser una motivación del gobierno de Peña Nieto, exige en cambio aceptar y adecuarse a los avances logrados en materia de instituciones democráticas e incluso dar algunos pasos hacia adelante. Pero todo ello está abierto a lo que ocurra en adelante.

2. LA DECEPCIÓN DEL PAN

Por otra parte, al compararse la experiencia de los partidos comunistas (y otros de tipo hegemónico o dominante) con la del PRI en México, se manejaba el escenario en el que, incluso sin cambios dramáticos en la estructura, ideología, organización o comportamiento de ese partido, podría retornar si sus sustitutos en el poder desperdiciaban su oportunidad desde el poder para mostrar diferencias significativas en su desempeño político. Estaban los casos de Polonia y de Hungría, donde tras un breve lapso en el poder, los partidos que vencieron al comunismo fueron removidos a su vez por otros partidos, en ese caso herederos del comunismo pero renovados y modernizados. Más adelante, en Taiwán ocurrió algo semejante, pero con cierta similitud con la experiencia mexicana. El Partido Nacionalista (Kuo Ming Tang) que había gobernado como partido único la isla desde los cuarentas, evolucionó como partido hegemónico (al estilo del PRI) en los noventas, aceptando gradualmente reglas más abiertas y competitivas en las elecciones. En el año 2000

el partido oficial perdió el poder nacional, derrota que fue aceptada por el gobierno saliente. El opositor Partido Democrático Progresista, con Cheng Sui Bian como candidato, venció al Kuo Ming Tang y blandía como principio fundamental la democratización, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción (de manera semejante a como lo hacía el PAN en México). Pero una vez en el poder, incumplió sus compromisos básicos e incluso incurrió en corrupción. Tras un primer periodo de gobierno, tanto el partido como el presidente fueron reelectos en 2004, aunque con un margen estrecho y en medio de acusaciones de fraude (algo semejante a lo ocurrido en 2006 con Felipe Calderón). Pero tras el segundo periodo, en 2008, el Partido Nacionalista retornó al poder y a partir de entonces fincó responsabilidad legal al presidente Chen Sui Bian por corrupción, paradójicamente haciendo suya la oferta incumplida por ese presidente en contra de la impunidad.

En México, el PAN representó una gran decepción pues Vicente Fox (2000-2004) relegó sus promesas de campaña de llamar a cuentas a los corruptos, poniendo fin a la tradicional impunidad; incluso fue acusado de tolerar la corrupción de su esposa, Martha Sahagún, mediante la cual enriqueció a su propia familia. Fox consideró que para impulsar las reformas económicas estructurales era menester contar con el respaldo legislativo del PRI y eso exigía a su vez extender una carta de impunidad a sus miembros. Contrarió con ello lo dicho por el ex secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo de México, Francisco Barrio (2000-2003), quien comparaba las reformas económicas con «cacahuates» en contraste con lo que para él eran «lingotes de oro», que era llevar ante la ley a los líderes petroleros que habían incurrido en un acto de corrupción durante la campaña de 2000 (conocido como «Pemexgate»).

Felipe Calderón (2006-2012), por su parte, tampoco llamó a cuentas a nadie. Por lo cual, tras doce años en el poder la ciudadanía bien podía concluir que la promesa democrática del PAN había sido esencialmente incumplida, y que ese partido desde el poder no había hecho diferencia significativa del PRI en su forma de gobernar (si bien el régimen sí había cambiado en varios sentidos, lo que dificultaba al partido en el poder, cualquiera que fuese, ejercer un control monopólico como lo había hecho el PRI durante su largo periodo hegemónico).

Que el PAN descuidara su promesa democrática, que había sido su principal estandarte desde que se fundó en 1939, lo reflejó también la persecución política que encabezó el gobierno de Fox contra el principal aspirante de la izquierda a la presidencia, el ex jefe del gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador (2000-2005). Fox Quesada utilizó en dos ocasiones el aparato del Estado para desprestigiar a López Obrador, así como su desafuero para inhabilitarlo como candidato presidencial, ante una infracción menor, semejante a las que en muchos otros casos (con gobernadores o alcaldes de

otros partidos, incluyendo al PAN) habían sido soslayadas. La utilización del Estado, la Procuraduría General de la República (PGR), en este caso, para fines electorales es una violación flagrante de las reglas democráticas, pues en tal caso la oposición no se enfrenta a un partido más, sino a los enormes recursos del Estado. Justo esa había sido una de las quejas principales del PAN al régimen priista, pero el ex presidente Fox decidió recurrir a una práctica semejante, misma que no fructificó pues la mayoría de la ciudadanía no vio en ello la aplicación estricta de la ley —como lo pretendía el gobierno panista— sino justo una utilización indebida y antidemocrática del Estado para fines político electorales.

Una movilización nutrida (de más de un millón de ciudadanos) en la capital orilló a Fox a dar marcha atrás en su intentona, arrojando en cambio saldos positivos a quien pretendía desbarrancar. En la decepción democrática generada por los gobiernos panistas contó el hecho de que tanto Fox como Calderón encumbraron a la lideresa del poderoso sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo, con cargos para su equipo y el consecuente control de jugosos presupuestos gubernamentales. Con ello se daba la espalda al histórico compromiso panista de luchar contra el corporativismo autoritario que había distinguido al régimen priista, pero que ahora los gobiernos del PAN reivindicaban a su favor.

Probablemente contó también en la derrota del PAN en 2012 (cuya candidata, Josefina Vázquez Mota, quedó en tercer sitio) la política pública que Calderón decidió como prioritaria en su gobierno, a saber, el combate frontal a los cárteles del narcotráfico. Desde luego, esa es obligación del Estado, como insistía el propio Calderón, pero hay una gama de alternativas para enfrentarlo, como lo refleja la variedad de respuestas que se da a ese problema en diversos países del mundo. A poco de llegar al poder, Calderón decidió dar mayor relevancia al uso de la fuerza policiaca y militar como solución al problema, pero de manera improvisada, sin consultas a otros poderes, sin planeación, sin valorar las providencias institucionales o legales (como un protocolo para el cuidado de los derechos humanos por parte de los militares, que surgió tan tarde como 2011), políticas, diplomáticas, penitenciarias, etcétera. El resultado fue, como muchos expertos y analistas previeron desde el principio, una mayor pérdida de control territorial por parte del Estado, el incremento tanto de la delincuencia como de la violencia y la inseguridad, así como la afectación del ciudadano ordinario en su seguridad y sus derechos humanos (por parte de las fuerzas del Estado, ejército y policías). El cálculo de muertes derivadas de esta estrategia a lo largo del sexenio ronda los 60 mil muertos, que contrastan con la de por sí elevada cifra de 9, 000 que sumaron las bajas durante el sexenio de Fox.

Es probable que Calderón haya lanzado dicha estrategia (y en la forma en que lo hizo) buscando legitimarse en los hechos para compensar la débil

legitimidad que obtuvo en las urnas (pues, según varias encuestas, 50% de ciudadanos no validó su triunfo). También, haber decidido dicha estrategia sin mayores consultas probablemente se debe a que esperaba beneficiarse exclusivamente de la popularidad que inicialmente tuvo, pero sin considerar que al paso del tiempo la tendencia se revertiría en su contra. Calderón pretendió, pasadas las elecciones, explicar el desplome de su partido en virtud de errores de campaña, que desde luego los hubo, para así deslindar al máximo la propia responsabilidad de su gestión. Pero es inevitable tomar una elección como la evaluación más patente del gobierno que recién termina (lo mismo en los estados que en el nivel nacional). Y en esa medida, los resultados del PAN son fiel reflejo del fracaso de su gobierno, no en todos los rubros (se mantuvo la estabilidad económica, por ejemplo, que no es poca cosa), pero sí al menos en lo que fue el eje de su gestión.

3. LA RIJOSIDAD DE LA IZQUIERDA

Por otro lado, el triunfo del PRI debe explicarse también por el fracaso de la izquierda para alcanzar el poder, pues en un sistema tripartidista lo normal es que tras el fiasco del partido que encabezó la alternancia la balanza se incline primero hacia la tercera opción antes que por el antiguo partido oficial. Eso mismo pudo vislumbrarse en 2006, cuando el entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, aventajaba en las encuestas presidenciales desde los años previos a la elección presidencial, y así se mantuvo hasta pocos meses antes de la jornada electoral. Esa fue una primera oportunidad del PRD para alcanzar, por fin, el poder presidencial desde su surgimiento en 1989. Sin embargo, el candidato López Obrador, sintiéndose ganador anticipadamente (pues todavía en marzo las encuestas le daban un promedio de diez puntos de ventaja), cometió numerosos y graves errores que le fueron restando esa ventaja, faltó al primer debate presidencial (de dos oficiales), se peleó con numerosos actores políticos y sociales (cuando lo normal es que el puntero evite al máximo la confrontación, que no necesita y que le puede restar puntos, como ocurrió), no buscó alianzas para consolidar su triunfo (pudo ocurrir con la candidata del nuevo partido de izquierda Alternativa Social-Demócrata, Patricia Mercado, pero no lo hizo), no respondió oportuna y puntualmente la campaña negativa lanzada por el PAN, principal rival en esa contienda. Ante todo lo cual llegó al día de la elección en empate técnico con su rival panista, circunstancia en que cualquiera de los punteros puede ganar, e incluso un monto poco significativo de irregularidades puede ser determinante en el resultado.

El veredicto oficial apuntó un triunfo de Felipe Calderón por menos del 1%, ante lo cual procedía (como ocurre en cualquier país democrático) una revisión y apertura de los paquetes electorales tan exhaustiva como legalmente

fuera posible. Ese fue la principal y lógica exigencia de López Obrador en el litigio poselectoral. No ocurrió así, pues entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se abrieron el 14% de paquetes, cuando aquellos que tenían inconsistencias aritméticas constituían el 64% (que según el Tribunal en su primer fallo del 5 de agosto, debieron ser abiertos y revisados en su totalidad durante el cómputo distrital del IFE). El Tribunal no ordenó después dicho recuento pese a contar con facultades legales y jurisprudencia derivada de ellas para abrir cuantos paquetes hicieran falta en situación tan excepcional con miras a imprimir plena certeza en el resultado. El Tribunal dio por válida la elección y señaló que las inconsistencias aritméticas habían sido en su mayoría depuradas y justificadas, y las que no lo fueron no afectaban el resultado. No fue así; en las actas electorales quedaron registradas aproximadamente 600 mil inconsistencias aritméticas (tras haber sido depuradas o justificadas con los criterios utilizados por los magistrados electorales) que por ende, rebasan los 234 mil votos con que aventajó Calderón a López Obrador. Por lo tanto, la certeza quedó opacada, no pudiéndose saber con precisión por quién sufragó la mayoría de los electores a partir de lo dispuesto por la normatividad.

Las dudas y malestar de López Obrador ante el resultado eran por ende comprensibles. Sin embargo, la forma en que manejó el conflicto poselectoral terminó por minarle apoyo entre sus propios votantes y el electorado independiente que constituye el fulcro de la balanza (buena parte del cual ya había perdido antes de la elección). Por un lado, reclamó un magno fraude de 10 puntos porcentuales pero sin presentar pruebas fehacientes de ello (cuando en realidad bastaba documentar irregularidades, en su caso, de 1% para que fueran determinantes en el resultado). Por otra parte, tomó las calles de la avenida Reforma en la ciudad de México por seis semanas, afectando a los habitantes de la ciudad (lo mismo el tránsito que el comercio) mayoritariamente perredista, lo que generó el enojo y la desconfianza de muchos de sus seguidores. Finalmente, se hizo ungir como “presidente legítimo”, una medida desde luego no violenta pero que implica desconocer las reglas y resultados del arreglo democrático (y según los teóricos de la democracia, equivale a “patear el tablero”). Electoralmente, ese acto mostraba falta de la seriedad esperada en un estadista (al menos para los electores independientes, sin cuyo respaldo mayoritario es imposible ganar una elección, y que siguieron alejándose a partir de entonces). De ahí que podía inferirse que en 2012, la candidatura de López Obrador no lograría los suficientes votantes independientes como para ganar al candidato priista.

Justamente por ello, se podía suponer que Marcelo Ebrard, ex jefe del gobierno capitalino (2006-2012), que había mostrado mayor moderación política y discursiva, así como mayor compromiso y desenvolvimiento dentro del marco institucional, sí podría aglutinar el mayoritario voto anti PRI

(calculado en encuestas en 60% aproximadamente). Sondeos, encuestas y grupos de enfoque sugerían que Ebrard, de ser designado candidato de la izquierda con el hipotético (y para muchos, fantástico) respaldo de López Obrador, podría captar el voto de la izquierda, el voto útil de panistas que no deseaban el retorno del PRI, así como el de algunos abstencionistas y anulistas potenciales, e incluso otros que, entre Peña Nieto y López Obrador, optaron por el primero (pero que de ser la disyuntiva entre Peña y Ebrard, lo hubieran hecho por el segundo).

Para la designación del candidato del PRD se postularon como aspirantes tanto López Obrador como Ebrard y se dispuso que la decisión se tomara a partir de algunas encuestas en lugar de una elección primaria, pues en ocasiones anteriores éstas últimas solían terminar en comicios fraudulentos y graves divisiones. Pero uno de los partidos más cercanos a López Obrador había adelantado que él postularía exclusivamente a López Obrador y no a Ebrard, lo que fue interpretado como que, de optar el PRD por postular al jefe de gobierno, habría ruptura de la izquierda e iría con dos candidatos a la elección (lo que garantizaba la derrota de la izquierda). Ebrard entendió el mensaje y optó por hacerse a un lado, pues de continuar en la contienda seriamente sería acusado de ser el responsable de la fractura y la consecuente derrota, anulando cualquier futuro político. Pero lo hizo guardando las formas; esperó a la encuesta para que no se dijera que había declinado sin dar la batalla, y aceptó el veredicto de la misma, favorable a López Obrador, con lo que daría la imagen de un político con palabra y compromiso democrático. Probablemente, no por casualidad, la encuesta se basó en cinco preguntas, tres que se referían al posicionamiento en ese momento (noviembre de 2011) y dos relativas a algo más importante, la capacidad de crecimiento durante la campaña. El primer tipo de pregunta lo ganó López Obrador y el segundo, Ebrard (que tenía mucho menos negativos que su contendiente). Así quedó el resultado prefigurado; tres preguntas ganadas por López Obrador, y dos por Ebrard (de haber sido tres y tres preguntas para cada tema, hubiera habido empate, y de haber sido dos para el primer tema y tres para el segundo, el ganador hubiera sido Ebrard).

Aunque López Obrador logró situarse en el segundo sitio, en parte por el respaldo que recibió por parte de un movimiento estudiantil (#YoSoy132) surgido contra Peña Nieto, no logró rebasar al candidato del PRI. Perdió por 6.6 puntos porcentuales de diferencia (equivalente a 3 millones 300 mil votos, catorce veces más que la diferencia con la que perdió en 2006). Lo que faltó fue agregar una mayor proporción de votantes independientes, pese a haber logrado el respaldo de la mayoría de ellos. En marzo todavía 45% de los independientes apoyaba a Peña Nieto, mientras López Obrador convocaba apenas al 26% de ese segmento (*Reforma*, marzo de 2012). López Obrador intentó evitar los errores de 2006, y presentarse como más

moderado y con un discurso más institucional. Eso permitió la reducción de sus votos negativos y la consecuente transferencia de votos independientes del PRI al PRD. Al final, 41% de ese segmento apoyó a López Obrador frente al 32% que lo hizo por Peña Nieto. Desde luego, fue una gran hazaña del tabasqueño haber arrebatado a Peña esa cantidad de votos independientes, pero no bastaron para el triunfo. El problema radicó, de nuevo, en el menor voto duro del PRD, 16% frente al más robusto del PRI, 28% (encuesta de salida de *Reforma*, julio de 2012).

La candidatura de López Obrador, con los negativos con que inició la campaña y su consecuente dificultad para atraer suficiente voto independiente, hizo imposible que la izquierda aprovechara esta segunda oportunidad de alcanzar el poder nacional en virtud del rechazo simultáneo hacia el PAN (con 70%), y hacia el PRI (con 60%). Y es que la corriente antiobradorista resultó mayor que la corriente antipriista. Es en ese sentido en que puede decirse que el PRI ganó la elección que le dio derecho a retornar al poder por *default*, es decir, menos por méritos propios que por errores y fracasos de sus adversarios, si bien no debe minimizarse el hecho de que cumplió su parte al sustituir exitosamente (aunque con dificultades, como se vio) su anterior gobernabilidad “vertical” por otra para él novedosa, de corte “horizontal”, lo que le permitió tomar las grandes decisiones internas sin rupturas y confrontaciones que pusieran en riesgo su unidad básica.

4. REFERENCIAS

- Aparicio, Javier, “¿Por qué hay tantos errores e inconsistencias en las actas de escrutinio?”, CIDE, 13 de agosto de 2006.
- Aparicio, Javier, “La evidencia de una elección confiable”, *Nexos*, México, no. 46, octubre de 2006.
- Castañeda, Jorge y Aguilar, Rubén, *La diferencia; radiografía de un sexenio*, México, Grijalbo, 2010.
- Crespo, José Antonio, *¿Tiene futuro el PRI? Entre la supervivencia democrática y la desintegración total*, México, Grijalbo/Raya en el Agua, 1998.
- Crespo, José Antonio, *2006: hablan las actas; las debilidades de la autoridad electoral mexicana*, México, Debate, 2008.
- Crespo, José Antonio, *PRI: de la hegemonía a la oposición. Un estudio comparado 1994-2001*, México, Centro de Estudios de Política Comparada, 2001.
- Fox, Vicente, *La revolución de la esperanza; la vida, los anhelos y los sueños de un presidente*, México, Aguilar, 2007.
- Lajous, Alejandra, *Vicente Fox; el presidente que no supo gobernar*, México, Océano, 2007.
- Lajous, Alejandra, *Confrontación de agravios; la postelección de 2006*, México, Océano, 2007.
- Pempel, T.J. (comp.), *Democracias diferente Los regímenes con un partido dominante*, México, FCE, 1991.
- Pliego, Fernando, *El mito del fraude electoral en México*, México, Pax, 2007.
- TEPJF, *Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005*, México, TEPJF, 2005.